

EL GOBIERNO DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET EN CHILE

1973-1990

por

Alejandro San Francisco R. y **Angel Soto G.***
Pontificia Universidad Católica de Chile **Universidad de los Andes (Chile)**

Publicado en *Aportes* Año XIX, N°55, 2004, pp. 98-123.

El 11 de septiembre de 1973, las FFAA y de Orden, encabezadas por el general Augusto Pinochet Ugarte pusieron término al gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). A partir de entonces, se inició en Chile una profunda transformación económica, política y social que duran hasta hoy, treinta años después de la intervención militar.

Palabras claves: Chile - Gobierno Militar - Augusto Pinochet - Golpe de Estado - Salvador Allende - 11 de septiembre de 1973

On September 11, 1973, the Chilean Armed Forces, led by General Augusto Pinochet, overthrew President Salvador Allende and put an end to the Popular Unity Government (1970-1973). At that moment, Chile embarked on a deep economic, political and social transformation, which continues today, three decades after the military intervention.

Keywords: Chile- Military Government - Augusto Pinochet- Coup d'etat- Salvador Allende - 11 September 1973.

Introducción

El 11 de septiembre de 2003 se cumplirán 30 años de la intervención militar en Chile, que puso al mando de la nación a una Junta de Gobierno encabezada por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet Ugarte y que gobernó al país hasta el 11 de marzo de 1990.

Correspondió al actual Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre, recordarle al país dicho aniversario, fecha histórica, de importancia capital en la última gran transformación de Chile y de dimensiones divisorias en la sociedad chilena hasta nuestros días. En un documento titulado “2003: Un desafío futuro” (*La Tercera*, Santiago, 5/1/2003), el militar planteó su deseo que la fecha no signifique enfrentamientos o animadversiones entre sectores de la sociedad chilena, y que prefería que la cuarta década “del día en que nos vimos todos envueltos en una gravísima enemistad cívica” sea un período de reflexión profunda y amplia en torno a los valores que nos unen y sobre los que se construye el futuro de Chile. En la oportunidad, el uniformado agregó: “No soy un actor político, ni deseo serlo; tampoco soy – ni lo es la institución a mi mando – heredero de un determinado régimen de gobierno. Su defensa, si fuere necesario, compete a otras personas o entidades. Haber asumido que este es

-
- Alejandro San Francisco R. Magister en Humanidades, Universidad Adolfo Ibáñez y Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor en la Facultad de Derecho e Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Email: asanfran@puc.cl
 - Angel Soto G. Doctor en América Latina Contemporánea, IU Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Magister en Ciencia Política y Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes (Chile). Email: asotog@uandes.cl

el estado de la situación no me parece un logro menor. El Ejército no es contraparte de ningún partido político o sector de la sociedad. Pertenece a todos los chilenos, a quienes está llamado a servir por igual”.

Las reacciones fueron muchas y variadas, pero lo concreto es la necesidad de mirar al pasado, con sus celebraciones y dolores, con sus décadas de interesantes cambios y con sus principales actores. En estas tres décadas, Chile ha cambiado radicalmente. La primacía del gobierno civil es evidente, así como también la naturaleza esencialmente democrática de sus instituciones. De igual manera, la economía libre ha marcado transformaciones importantes en la mentalidad y resultados económicos de Chile. En parte el país también cambió por el necesario “aprendizaje político” de personas y partidos, que han buscado evitar las divisiones extremas, la presencia de las armas en la actividad política o el tono grandilocuente y peligroso de la revolución.

Un pueblo sano no puede vivir “en” la historia, pero no puede olvidarse de ella, a riesgo de perder su identidad, sentido y misión. Si bien las epopeyas que antecedieron al 11 de septiembre o al plebiscito de 1988 tuvieron sus momentos culminantes y emotivos, lo correcto no es colgarse de ellos como quien carece de ideas para iluminar el futuro. Por eso la fecha de hoy, más que 1973 es el 2010. ¿Qué será Chile para el Bicentenario? ¿Vivirá de las divisiones tristemente acumuladas o seguirá soñando con la construcción de una patria común? Para poder responder a esa pregunta, necesariamente hemos de mirar la historia reciente de Chile, tarea que, como todos parecen coincidir, corresponde a los ciudadanos, a los analistas y, de manera particular, a los historiadores.

Efectivamente, el fin del gobierno de Salvador Allende y la llegada al poder del general Pinochet marcó, desde el punto de vista académico, un notable mayor interés en el estudio histórico y político de Chile. Por entonces, la llamada “vía chilena al socialismo” había concitado enorme popularidad a nivel internacional, además de un amplio respaldo al marxismo, de manera que su final también significó una preocupación. Lo mismo ocurrió con el gobierno entrante, más aún si había que encuadrarlo dentro de algunas de las formas habituales de descripción de los gobiernos militares en Iberoamérica: ¿una dictadura más? ¿el fascismo en el poder? ¿un gobierno de liberación nacional? ¿una nueva forma de gobierno militar? ¿una dictadura revolucionaria (o contrarrevolucionaria)? eran algunas de las preguntas formuladas y sólo ocasionalmente respondidas, no siempre con acierto.

A ello contribuían diversos elementos. El mayor de todos, sin lugar a dudas, la pasión política y su consecuencia natural, la “búsqueda” de enemigos. Los partidarios de la Unidad Popular (UP) condenaron drásticamente al nuevo gobierno en Chile y en el mundo, en tanto que los adversarios del “proyecto totalitario” chileno optaron por el apoyo al 11 de septiembre, con mayor o menor entusiasmo: era la liberación nacional. Las posturas no sólo fueron momentáneas, sino que también generaron dos bandos irreconciliables para referirse a un mismo hecho: los primeros lo llamarían “golpe de estado” y los segundos “pronunciamiento militar”. Ahora, treinta años después, tal diferenciación no es tan marcada y se habla - como ocurre en este artículo - indistintamente de “golpe”, “pronunciamiento” o “intervención” (sin

duda el concepto más objetivo), sin que ello necesariamente implique una postura favorable o contraria al hecho.

También el debate público estaba afectado por la ausencia de un diálogo abierto, con prensa libre o con discusión política. La Junta Militar gobernó con mano dura y bajo estado de sitio durante mucho tiempo: la prensa fue controlada o prohibida, el Congreso Nacional clausurado, los partidos políticos puestos en un largo receso. Por tanto la política se redujo a la función de gobernar y mantener el orden.

Por último, la campaña de desinformación deliberada (o por error) marcó al gobierno militar desde su origen. Éste sostenía la paz interior, la ausencia de violaciones a los derechos humanos, entre otras cosas. Sus detractores hablaron del asesinato de Allende, decenas de miles de muertos, cientos de miles de exiliados. En tanto que el propio Pinochet mostró desinterés por mejorar la imagen exterior de su gobierno. La comprensión del proceso político chileno, desde Allende a Pinochet, se hacía difícil o "incomprensible".

Sin embargo, antes de seguir, hay una pregunta que es obligada al hablar del gobierno militar: ¿por qué los militares llegaron al poder en 1973? Y luego otra de casi igual importancia: ¿cuál es su legado? Quizás tal como reaccionó otro ex uniformado ante las declaraciones del general Cheyre, el ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (r) Guillermo Garín, "el único heredero del Gobierno Militar es el país", ello porque "el gobierno militar (lo) modernizó... y entregó las herramientas para lograr lo que hoy somos".

El presente artículo no pretende convertirse en un detallado repaso de los sucesos ocurridos durante el gobierno militar chileno (1973-1990), tampoco es una crónica ordenada de los principales sucesos de esos 17 años. Su objetivo, más modesto, es dar una serie de claves que permitan al lector no especializado enfrentarse con posterioridad a unos hechos que en reiteradas ocasiones aparecen como demasiado complejos o distorsionados y que están directamente relacionados con el pasado inmediato de Chile. Esto implica centrarse en los aspectos fundamentales de la nueva institucionalidad política y económica, poniendo el énfasis en los elementos más explicativos. A modo de consideraciones finales, se resumen los legados que dejó el gobierno para la democracia, que hemos denominado "enclaves libertarios", así como también aventuramos algunas ideas acerca de cómo pasará el general Pinochet a la historia. Se concluye con una bibliografía sugerida que recoge algunas de las obras más significativas para el estudio del gobierno militar chileno y que puedan servir de base para iniciar estudios posteriores o profundizar aspectos de interés para el lector.

La génesis del Gobierno Militar y la intervención del 11 de septiembre

¿Buscaban los militares el poder? ¿Qué grupos estuvieron detrás del 11 de septiembre de 1973? ¿Por qué las Fuerzas Armadas y de Orden decidieron poner fin al gobierno de Allende?

El tema es amplio y lleno de matices, pero se puede llegar a algunos elementos centrales, con una definición previa: durante 1973 fueron muy pocos los actores políticos que todavía pensaban que habría una solución institucional al margen de la intervención militar. De partida, el mismo Allende había llamado personalmente a los militares a formar parte de su gobierno,

como había ocurrido en otros momentos históricos en situaciones de pre-ruptura política. Balmaceda convocó a los militares a su gabinete en 1890 y Arturo Alessandri lo hizo en 1924.

Pero una causa fundamental sobre la intervención militar es, sin duda, el fracaso del gobierno de la Unidad Popular. El gobierno de Allende tuvo conflictos que afectaron uno de los valores más preciados por los militares, como es el orden y los consensos básicos. El caos ambiental, el fantasma de la guerra civil, la crisis económica, los continuos paros y tomas, la formación de grupos paramilitares, la violencia, fueron creando el ambiente que estimulaba una solución de fuerza, como única manera de terminar con la crisis integral que vivía el país. Incluso sectores de la UP promovían una resolución armada del conflicto político, dejando atrás la llamada “vía chilena al socialismo”. De ahí que en 1973, desde todos los ambientes, se denunciara el peligro inminente de la guerra civil.

Luego, contribuyó a la decisión de las FFAA el apoyo de amplios sectores civiles y políticos, frente a la situación minoritaria de la UP durante todo su gobierno. En primer lugar las mujeres y sus “cacerolazos”, aquellas marchas en que, portando las “ollas vacías”, las golpearon en señal de descontento. También estaban los estudiantes, fundamentalmente aglutinados por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) quienes fueron creando una conciencia en la ciudadanía sobre la necesidad de revertir el proceso totalitario, para lo cual pidieron la renuncia de Allende, a quienes se sumaron los alumnos y profesores de otras universidades y de los alumnos de la educación secundaria (FESES)¹. Con ellos estuvieron los obreros de El Teniente marchando hacia Santiago en medio de un paro de más de dos meses, en el año decisivo. En 1972, los camioneros organizaron el “paro de octubre”, entre muchos otros, todo lo cual reflejaban una situación de soporte civil a un eventual golpe militar.

El desenlace violento se veía venir, ya fuese a través de la intervención directa de las FFAA y de Orden o por la vía del auto-golpe que propiciaban varios miembros de la propia Unidad Popular. En ese sentido la revista *Punto Final*, uno de los órganos periodísticos de la UP, publicó una edición “extra” el 3 de junio de 1973 en la que tituló en portada: “Dictadura popular: Único remedio contra los golpes de estado”. Lo que está en directa relación con una serie de titulares de la prensa que el Partido Comunista emitió en los días previos al 11 de septiembre, pero que ejemplifican la crisis final que vivía la sociedad chilena: “Obreros y campesinos en pie de combate”; “Toquen al Presidente y verán lo que pasa, momios chupasangre”; “CUT acelera la defensa del gobierno legítimo. ¡Chileno, el pueblo te llama a sus filas...”; o la del propio diario *El Siglo*, órgano del PC, que ese 11 de septiembre tituló en portada: “Partido Comunista llama al pueblo ¡Cada cual en su puesto de combate!”.

No cabe ninguna duda que un elemento central y definitorio fue la Declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que señaló a la UP como un gobierno que se

¹ Para el mismo 11 de septiembre de 1973 estaba programada una marcha juvenil por las calles de Santiago con ese objetivo. En su convocatoria, el presidente de la FEUC, Javier Leturia señaló: “El objeto de esta marcha es hacer presente al Presidente Allende y al país que la juventud chilena cree llegado el momento de elaborar, bajo la dirección unitaria de las Fuerzas Armadas, una nueva institucionalidad para Chile, que impida el sectarismo, la ineficacia y la demagogia continuen destruyendo al país. Para esto es necesario, a nuestro juicio, que el Presidente Allende renuncie cuanto antes a su cargo, exigencia que es además reclamada por la inmensa mayoría de Chile...” *El Mercurio*, Santiago, 11.IX.1973.

había puesto fuera de la Constitución y de la ley. Esta fue la definición política que necesitaban los militares. La declaración, entre muchos otros elementos, señaló que el gobierno de la Unidad Popular había violado los derechos de reunión, libertad de enseñanza, propiedad, libertad de prensa; había amparado grupos paramilitares; “que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece” (Considerando 5°). Un aspecto relevante es que dicho documento representó un sentir ciudadano importante expresado en el Congreso, ya que fue firmado por la mayoría opositora en la Cámara que incluyó a los parlamentarios de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional.

Allende respondió a dicha acusación el 24 de agosto, con las siguientes palabras: “Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover al golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil”. La oposición y el Gobierno concordaban en un aspecto: en que era un llamado explícito a las FFAA a intervenir, a resolver el hasta entonces insoluble conflicto político.

Finalmente, y solamente como resultado de todo lo anterior, está el acuerdo al interior de todos los institutos armados de tomar esta decisión. Otra cosa habría sido la guerra civil: pero la intervención contó con la actitud decidida y uniforme de todos ellos, más allá de algunas definiciones particulares de quienes permanecieron junto al Presidente Allende hasta el final.

Sólo faltaba la decisión, que vino el 11 de septiembre. En esa ocasión los militares ejercieron su función de custodios o garantes de la Constitución, que la historia de Chile les había encomendado en diferentes ocasiones, actuando de acuerdo a la doctrina tradicional del Ejército, después rebautizada como Doctrina Schneider. Como resumió un par de meses después el ex Presidente Eduardo Frei M., “las Fuerzas Armadas - estamos convencidos - no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo”.

La intervención militar se produjo el martes 11 de septiembre de 1973. Las tres ramas de las Fuerzas Armadas junto a Carabineros de Chile, se pronunciaron contra el gobierno, en un hecho de fuerza más violento del previsto y que tuvo menos resistencia de la esperada. En la ocasión constituyeron una Junta de Gobierno encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet; el Comandante en Jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, y el General Director de Carabineros, general César Mendoza².

² El orden de primacía no fue al azar. Si bien la Marina y la Fuerza Aérea fueron quienes planearon la intervención, fue el Ejército quien encabezó la presidencia de la Junta por ser el arma más antigua. El gesto, especialmente de parte de Merino, quería simbolizar la férrea unidad de todas las FFAA en la acción emprendida. Originalmente se estableció que dicha presidencia sería rotativa, pasando a cada una de las instituciones según dicho orden. Sin embargo, al poco tiempo, Pinochet fue asumiendo un liderazgo que lo llevó a mantenerse a la cabeza de la Junta y que al poco tiempo

Mientras ocurrían los sucesos, Allende pronunció un discurso final lleno de emoción, en el cual señaló: “Ante estos hechos sólo me cabe decirles a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

La propaganda nacional e internacional hizo ver la muerte de Allende como un asesinato. Neruda habló de un Presidente “acribillado”, lo mismo dijo Fidel Castro días después del 11 en La Habana. La verdad es que Allende puso fin a su propia vida con un arma que le regaló el propio líder cubano y que tenía grabada una dedicatoria “a su compañero y amigo de armas”³. El propio Castro le había recomendado no ceder, convocar al pueblo y morir, si fuese necesario, combatiendo. Al suicidarse tenía en mente a uno de los pocos presidentes chilenos que admiraba, José Manuel Balmaceda quien había tomado la misma decisión el 19 de septiembre de 1891, después de su derrota en la guerra civil, así como asumía un “sacrificio” de cara a la historia. El mismo Allende había declarado que “su carne” era “carne” de estatuas, y que éstas se construirían mucho antes en el extranjero que en el propio Chile.

A los pocos días la situación estaba controlada, el fantasma de la guerra civil tantas veces anunciado ni siquiera asomó, aunque sí existieron algunos enfrentamientos aislados en algunas poblaciones. Más allá de esto, la férrea unidad de las FFAA hizo prácticamente imposible cualquier oposición militar con medianas posibilidades de éxito. Fruto de la aguda división reinante, el hecho fue visto de manera contradictoria: para algunos se acababa el sueño de la sociedad socialista, por la que tanto habían luchado; para otros era el fin del peligro más grande contra la integridad nacional, pero Chile había salido en alto, conservando su libertad.

Cuadro N°1
Evolución de las principales variables macroeconómicas, 1970-1973
(Porcentaje)

	1970	1971	1972	1973
Tasa de crecimiento económico PIB	3,6	8,0	-0,1	-4,3
Tasa inflacionaria anual (IPC)	36,1	22,1	260,5	605,1
Tasa nacional de desempleo	5,7	3,8	3,1	4,8
Aumento anual de los salarios reales	8,5	22,8	-11,3	-38,6

Fuentes: Banco Central, CIEPLAN, ODEPLAN. Citado de: Felipe Larraín y Patricio Meller, “La experiencia socialista-populista chilena: 1970-1973”. En Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards (Comps.), *La macroeconomía del populismo en la América Latina*. FCE, México, 1992: 229.

fue dando origen a un “Pinochetismo” por parte de la ciudadanía que simbolizó en él todo el proceso de cambio que estaba viviendo el país. Este liderazgo, por cierto no estuvo exento de conflictos, como los ocurridos con Leigh y que terminaron con su destitución en 1978.

³ Así lo confirmó la propia ex secretaria personal de Salvador Allende, Miriam Contreras, más conocida como “La Payita”, en una entrevista concedida al diario italiano *La Época* en 1988. Véase *El Mercurio*, Santiago, 23.XI.2002.

Formación de equipos para dos definiciones fundamentales: el modelo económico y la institucionalidad política

Una vez controlado el poder, la Junta de Gobierno debió preguntarse: ¿Qué hacer desde el Gobierno? ¿Convocar a elecciones? ¿Devolverlo a un grupo de civiles más o menos representativo? Por otra parte, ¿cómo reorganizar la economía chilena, destruida durante la UP? ¿Cuál de todos los modelos en boga seguir? Lo único claro es que el gobierno militar no tenía un programa político ni económico al momento de asumir, y las grandes definiciones en esta área se dieron de entre algunas propuestas que propiciaron distintos sectores afines al gobierno o que al menos apoyaron la intervención militar. Claro está que inicialmente el nuevo gobierno llamó a restaurar “la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada”, asumiendo el poder “por el solo lapso que las circunstancias lo exijan”, lo que fue considerado como la manifestación de que la intervención militar sería breve y restauradora.

En lo político, algunos plantearon el pronto retorno a la democracia tradicional chilena, destacando en este sentido los dirigentes de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei M. y Patricio Aylwin como los más importantes⁴. Otros veían en el sistema español de Franco un modelo natural a seguir en Chile, con los militares vencedores gobernando largos años y, eventualmente, estableciendo un modelo político corporativista. La alternativa triunfadora fue la de establecer una profunda reforma, que significaba crear una “nueva institucionalidad”, liderada por los militares y grupos civiles afines, que culminaran con una nueva Constitución y con una transición progresiva a la democracia política occidental, cuyo principal sostenedor y difusor fue el líder del gremialismo Jaime Guzmán.

En el plano económico la tradición militar, así como la chilena y latinoamericana en general, era más bien estatista: ahí estaban el ejemplo de Ibáñez en los años 20 y la larga trayectoria socializante durante el resto del siglo. Curiosamente Pinochet optó por un modelo de desarrollo económico liberal, con el apoyo fundamental que brindaron los jóvenes economistas graduados en importantes universidades norteamericanas, conocidos como los “Chicago Boys”, los cuales tenía a su favor una sólida formación técnica que les permitía contar con un discurso coherente, homogéneo y “apolítico”. Este último aspecto no es menor, sobre todo si consideramos que el nuevo gobierno culpaba a la “politización” de la sociedad como una de las causas de la crisis de la democracia.

Una de las tareas prioritarias que se fijó el nuevo gobierno fue la formación de equipos de trabajo para definir el modelo económico y la institucionalidad política del país. Después de un tiempo de ambigüedad respecto al camino que tomaría el país, el Gobierno Militar optó finalmente por los economistas liberales en la estructuración de la economía de mercado

⁴ Los partidarios de la UP no podían expresar su protesta, pero por ellos lo hizo otro grupo de dirigentes y parlamentarios DC quienes señalaron en *El Mercurio* del día 15 de septiembre de 1973: “Hoy, 13 de septiembre, los abajo firmantes, dejando constancia de que ésta es la primera ocasión en que podemos reunirnos para concordar nuestros criterios y explicitar nuestra posición política, después de consumado el golpe militar de anteayer, venimos en declarar lo siguiente: 1) Condenamos categóricamente el derrocamiento del Presidente Constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo gobierno –por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido- fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosamente ante el sacrificio que él hizo en defensa de la autoridad constitucional.” Luego, refiriéndose tanto a la UP como a la derecha (económica), este mismo documento señala: “Estos sectores

chilena y por un grupo de abogados – cuya principal figura era Jaime Guzmán – para la redacción de una nueva Constitución.

En ambos casos había más que una o dos personas “iluminadas”, más bien se trató de dos corrientes generacionales que asumían el desafío de transformar el modelo de desarrollo del país. Los Chicago Boys tienen su origen en estudiantes de Economía de la Universidad Católica, que estudiaron post-gradados en la prestigiosa Universidad de Chicago. La idea de fondo era crear un grupo de profesionales preparados en economía científica y no escapó a los promotores de la idea la línea dominante en la universidad norteamericana, derechamente partidaria de la economía libre. Era un modelo alternativo al de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) de la CEPAL y, obviamente, distante del socialismo marxista. Después de una influencia más bien académica en los años '60, o bien reducida al grupo de empresas Edwards y el diario *El Mercurio*, el advenimiento de la Junta Militar en 1973 les permitió a los Chicago Boys una influencia más directa en la política económica de Chile, con vínculos que comenzaron a través de la Marina y que luego se extendieron al conjunto del régimen.

La base ideológica del grupo quedó resumida en *El Ladrillo*, texto fundamental de las reformas económicas chilenas aplicadas a mediados de los '70 y redactado por algunos economistas tales como Emilio Sanfuentes, Pablo Baraona, Sergio de Castro, Sergio Undurraga y Alvaro Bardón, entre otros. Más tarde, muchas de las principales figuras de los Chicago Boys ocuparon importantes puestos en ODEPLAN, liderados por Miguel Kast, quien dio un nuevo impulso al envío de jóvenes a Chicago, una nueva generación de economistas. Un elemento no menor que es necesario precisar es que forman parte de esta generación dos figuras centrales de la revolución económica, aunque estudiaron en otras universidades norteamericanas: José Piñera, Ministro de Trabajo y de Minería (ex alumno de Harvard) y Hernán Büchi, Ministro de Hacienda (ingeniero civil de la Universidad de Chile y alumno de Columbia). Todos estos economistas, constituyen los que hemos de llamar lo verdaderos “padres fundadores” del modelo económico chileno.

El otro grupo generacional es el gremialismo, fundado por Jaime Guzmán en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica en 1966 y un año más tarde a nivel de toda la universidad. Jaime Guzmán no era un liberal, sino un tradicionalista, que había recibido su formación del Padre Osvaldo Lira y del historiador Jaime Eyzaguirre. Sin embargo, un concepto central fue determinando su pensamiento: el principio de subsidiariedad. El gremialismo además rechazaba el carácter revolucionario y totalitario de la época, y Guzmán mismo encabezó una férrea defensa del principio de autoridad frente a rasgos anarquizantes del espíritu reformista. Aunque muchos aseguran que el acercamiento de Guzmán con los Chicago se produjo en pleno Gobierno Militar, creemos ver momentos decisivos en los comienzos del gremialismo como fue la toma de la Universidad Católica en agosto de 1967; la primera elección victoriosa en la Federación de Estudiantes de esa universidad, FEUC, un año más tarde; la campaña presidencial de Jorge Alessandri en 1970 y el frente común de lucha contra la Unidad Popular.

extremos alinearon psicológicamente a la opinión pública e incluso, a nuestros dirigentes políticos y militares, creando la sensación falsa de que no había otra salida para la crisis chilena que el enfrentamiento armado o el golpe militar”.

En resumen, se puede afirmar que fueron los Chicago Boys más los gremialistas quienes promovieron con más fuerza y claridad – desde el Gobierno Militar y unidos en su apoliticismo – las bases de lo que se denominó “una sociedad libre”, en la forma como fue concebida finalmente a través de las modernizaciones y las transformaciones institucionales.

El modelo económico chileno

El derrumbe de la democracia chilena se produjo en septiembre de 1973, sin embargo el enfoque económico de carácter estatista siguió un tiempo más. De hecho, a pesar que el nuevo gobierno comenzó rápidamente a suprimir el control de precios, a dismantelar las regulaciones, a reformar el sistema tributario y a devolver las empresas nacionalizadas a manos privadas, estas decisiones no constituían una visión coherente del futuro económico del país. Así, para poder hablar de una transición chilena hacia la economía de libre mercado, hay que situarse en abril de 1975, cuando el Ministro de Hacienda Jorge Cauas anunció el “Plan de Reconstrucción Económica”⁵.

En los primeros meses tras la intervención militar existieron divergencias respecto a qué plan económico debía adoptarse, y el gobierno debió optar entre dos alternativas de emergencia: i) un prudente y gradual ajuste basado en una creciente ayuda financiera internacional, o ii) un shock fiscal y monetario destinado a restaurar rápidamente la viabilidad de la balanza de pagos y detener la espiral inflacionaria.

Se optó por el segundo, cuando Pinochet y sus asesores decidieron operar una transformación radical de la economía chilena en un sentido liberal. Para ello se conjugaron varias cosas: el fracaso de los modelos socialistas precedentes; la formación de un equipo de trabajo de corte liberal, los Chicago Boys; la existencia de un plan relativamente elaborado, a través del documento conocido como *El Ladrillo* y la decisión del Presidente Pinochet de avanzar en la ruta del libre mercado, desechando otras propuestas hechas por militares o partidarios del régimen. Lo anterior es un hito histórico de la mayor importancia en la trayectoria de Chile y, como se verá después, del continente: comenzaba la revolución capitalista chilena.

Los autores de este documento fueron llamados al Gobierno Militar, recién asumido, como asesores del equipo económico. Dada la crisis, se necesitaban profesionales -los cuales no estaban en las filas de las FFAA- y que al mismo tiempo no estuvieran “contaminados” políticamente. El modelo constituyó una verdadera empresa en el ámbito intelectual, ya que junto con persuadir, tuvo que capacitar a una elite -incluso (y especialmente) empresarial- que fuera capaz de remodelar el país. Era una visión revolucionaria que pretendía derribar el sistema económico imperante y construir uno notablemente novedoso, que en ese intento por comenzar una nueva etapa en la historia del país se ganó la simpatía de Pinochet. Por su

⁵ La idea de aplicar en Chile un modelo de libre mercado no era nueva, y los economistas que asumieron la responsabilidad estaban ligados a intentos anteriores. Recuérdese que anteriormente vimos como mediados de los sesenta, jóvenes economistas graduados en universidades chilenas y con postgrados en la Universidad de Chicago, pasaron a ejercer una importante influencia. Rápidamente establecieron lazos con los hombres de negocios chilenos más “modernos” y con ayuda de estos formaron CESEC. Además, como se recordará, ganaron influencia en *El Mercurio*, que los incorporó como redactores y publicó desde 1967 la *Página Económica*.

entrenamiento profesional, los militares tenían una visión nacionalista de la economía. Las políticas proteccionistas les parecían más propicias para la seguridad nacional que las apuestas al libre comercio. Asimismo, el estricto control gubernamental de inspiración nacionalista de las actividades económicas llamadas “estratégicas” parecía extenderse naturalmente al resto de ellas. Al tiempo que era el camino seguido por el resto de los militares en América Latina. Cualquier visión poco creativa aconsejaba seguir estos modelos.

Pero los “Chicago boys”, provocaron conflictos al interior del gobierno por la desconfianza de algunos sectores, entre los cuales estaba el Comité Asesor de la Junta de Gobierno (COAJ), la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y otros grupos civiles partidarios del régimen militar, conocidos políticamente como los “duros”. Al final, su capacidad técnica, avalada en una sólida teoría económica, y también la aparición en escena de otros factores externos, como la crisis de la balanza de pagos de 1975 -consecuencia del alza de precios internacionales del petróleo en 1973 y de la caída de los precios de los bienes en 1974- terminó por imponerse.

Las reformas liberales y modernizadoras debían atacar al conjunto de la sociedad chilena, de manera de superar los males que habían mantenido a Chile en una penosa pobreza y estancamiento. Éstas abarcaron todas las áreas de importancia económica, y su objetivo era dismantelar el régimen intervencionista creado en los años anteriores producto de políticas redistributivas. Ellas se aplicaron en forma gradual y no tuvieron un desarrollo fácil y lineal, sino que la reorganización pasó por etapas complejas, siendo la más crítica la crisis de la deuda en 1982-83.

Las principales medidas económicas adoptadas fueron: a) Redefinición del papel del Estado en la economía, que eliminó los déficit fiscales crónicos, redujo el gasto fiscal y los impuestos, levantó los controles de precios, liberalizó los mercados y privatizó la mayoría de las empresas estatales y parcialmente el sistema de seguridad social, la educación y la salud. b) La apertura de la economía al mundo exterior a través de la eliminación de las barreras no arancelarias a las importaciones y la rebaja y uniformidad de los aranceles. c) La creación de un mercado de capitales libre, la liberalización de la inversión extranjera y el establecimiento de un Banco Central autónomo. d) La flexibilización de los mercados laborales y la eliminación de la mayoría de las barreras de entrada a las diferentes ocupaciones, disminución de las restricciones a los despidos y eliminación de la intervención gubernamental en las negociaciones entre privados; y e) El fortalecimiento de una red social con el fin de mejorar las condiciones de los más pobres y protegerlos de las penurias del ajuste económico a través de varios programas gubernamentales que fueron focalizados hacia ellos y dirigidos a través de ODEPLAN.

Ante estas medidas, *El Mercurio*, principal órgano de prensa chileno señaló el 26 de abril de 1976: “Las principales medidas fiscales que piensan implementar tienen que ver con la reducción del presupuesto vigente... estas reducciones se llevan a cabo haciendo todos los sacrificios que son necesarios para ello, incluyendo la remoción de los funcionarios que no se avengan con el objetivo principal del gobierno, que es detener la inflación”. Agregó: “La opinión

pública debe comprender que cuando existen un gobierno fuerte y una política económica clara, que se llevará hasta el final, no debe hacer caso de rumores absurdos, que nada tienen que ver con la efectiva situación económica que el país vive y que además se contraponen a la política económica en marcha”.

Las ideas del libre mercado y el pensamiento de Friedrich von Hayek y Milton Friedman, al tiempo que alcanzaban un notorio éxito, se difundieron por *El Mercurio*, y también en las revistas *Economía y Sociedad* y *Realidad*, junto al respaldo público de economistas de renombre mundial que visitaban el país, entre los que estuvieron estos propios inspiradores, además de inversionistas y funcionarios de organismos internacionales.

El brote de optimismo provocado por el auge económico y la amplia propagación de las ideas de libre mercado sorprendieron a los grupos opositores con la guardia baja, al tiempo que por primera vez los intelectuales y políticos de tendencia izquierdista, se encontraron en una posición conservadora, pues debían defender el antiguo orden. Eso los llevó a comenzar a leer a los autores liberales y a revisar sus posiciones anteriores.

La aplicación de estas reformas liberales se aplicaron en dos fases: 1974-1981 y 1985-1989. En la primera fase, los esfuerzos fiscales se orientaron a la eliminación del déficit, reduciendo el sector público y haciéndolo más eficiente. Como consecuencia de ello fueron traspasadas más de 500 empresas al sector privado, aunque antes que proceder a la privatización se devolvieron aquéllas expropiadas durante la UP.

La reforma tributaria contribuyó a aumentar los ingresos fiscales, mientras que se abrió la economía a través de la eliminación de prohibiciones al comercio exterior, reducción de aranceles y barreras no arancelarias, e incentivo de las exportaciones, lo cual permitió una diversificación que redujo la participación del cobre en el total de las exportaciones.

El programa comenzó a mostrar resultados favorables a fines de 1975. La balanza de pagos mejoró y la inflación comenzó a disminuir. Entre 1976 y 1981 la economía vivió una saludable expansión liderada por las exportaciones, que culminaron en el boom de inversión y consumo de 1980-81. El PIB creció al 6,7% anual, las exportaciones al 10,7% y la inflación bajó de 369,5% en 1974 a 9,5% en 1981. Los salarios reales aumentaron y la deuda externa bajó, aunque creció el endeudamiento privado, especialmente de los grupos económicos. Se flexibilizaron las restricciones al ingreso de créditos extranjeros y el tipo de cambio se mantuvo fijo a \$39, todo lo cual se tradujo en un crecimiento del país que atrajo la atención internacional.

Cuadro N°2
Chile: Principales indicadores macroeconómicos, 1974-1981

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Crecimiento del PIB	1,0	-13,3	3,2	8,3	7,8	7,1	7,7	6,7
Tasa de Desempleo (promedio anual) ²	n.d.	14,9	12,7	11,8	14,2	13,6	10,4	11,3
Formación Bruta de Capital Fijo (% PIB a precios ctes.)	18,9	16,7	13,8	15,2	16,5	17,7	20,9	23,2
Ahorro Nacional Bruto (% PIB a precios corrientes)	n.d.	9,5	16,9	13,8	15,3	16,7	19,3	14,2
Déficit en Cuenta Corriente (% PIB)	0,5	6,4	-1,4	3,9	6,8	5,6	7,1	14,5
Crecimiento real anual de los salarios ²	2,3	-3,4	3,0	10,3	6,3	8,3	8,6	9,0
Tipo de Cambio Real (promedio 1986=100) ³	n.d.	n.d.	n.d.	57,1	68,1	70,2	60,8	52,9
Inflación (IPC) (dic-dic) ⁴	369,2	343,3	197,9	84,2	37,2	38,9	31,2	9,5

Superávit Sector Público no Financiero (% PIB)	-5,4	-2,0	4,0	0,4	1,6	4,8	6,1	0,8
Términos de Intercambio (1986=100)	225,9	121,4	132,6	122,3	120,9	134,7	132,7	122,3

n.d.: no disponible.

1 Cambio de metodología en 1992. Se utilizó como deflactor del IPC corregido de Cortázar y Marshall (1980)

2 Cambio de metodología en 1993.

3 Un aumento de este índice corresponde a una depreciación de la moneda local.

4 Para 1974-1978 se utilizó el IPC corregido de Cortázar y Marshall (1980).

5 Definido como precio de exportaciones de bienes y servicios dividido por precio de importaciones de bienes y servicios.

Fuente: Banco Central de Chile. Citado de: Felipe Larraín y Rodrigo Vergara (eds). *La transformación económica de Chile* (Santiago, CEP, 2000), p. 7.

Sin embargo, el optimismo se acabó repentinamente, cuando se desató la “crisis de la deuda”. La economía chilena se vio enfrentada en 1981 a un alza de las tasas de interés internacionales y a una nueva caída en los términos de intercambio, que la sumergieron en una depresión como la de mediados de los setenta. Esta crisis -como veremos más adelante- puso en cuestión el modelo hasta entonces imperante, al punto que los economistas de oposición previeron que no habría una recuperación rápida de la depresión de 1982, sosteniendo que la raíz del problema estaba en una excesiva liberalización de la economía. Incluso se escribieron documentos y libros explicando “el por qué del fracaso” y declararon “muerto el modelo liberal.

A principios de 1985 se hizo cargo del área económica un nuevo equipo encabezado por Hernán Büchi, figura central de la consolidación del sistema. Con él renació con más fuerza el modelo de mercado, reanudando no sólo el crecimiento en la producción y el empleo, sino que además se consolidaron y profundizaron las reformas liberales implementadas. El nuevo plan incluyó un riguroso ajuste fiscal, principalmente del gasto público, una fuerte devaluación del peso a fin de estimular las exportaciones no tradicionales y reequilibrar la balanza de pagos, que -junto a otras medidas- trajeron una fuerte y sana recuperación del producto y del empleo. La delantera la tomaron las exportaciones y la inversión, en tanto que el consumo y los salarios reales crecieron más lentamente. La inflación y la deuda externa bajaron tras su renegociación, lo que dio al país una confianza nacional e internacional. En 1989 se dio plena autonomía al Banco Central.

Cuadro N° 3
Chile: Principales indicadores macroeconómicos, 1982-1990

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Crecimiento del PIB	-13,4	-3,5	6,1	3,5	5,6	6,6	7,3	10,6	3,7
Tasa de Desempleo (promedio anual) ²	19,6	14,6	13,9	12,0	12,3	11,0	9,9	8,0	7,8
Formación Bruta de Capital Fijo (% PIB a precios ctes.)	15,8	13,7	16,3	17,7	17,1	19,6	20,8	24,5	24,2
Ahorro Nacional Bruto (% PIB a precios corrientes)	4,9	6,9	6,5	7,8	11,5	17,3	22,3	23,3	23,2
Déficit en Cuenta Corriente (% PIB)	9,0	5,5	10,8	8,6	6,7	3,6	1,0	2,5	1,6
Crecimiento real anual de los salarios ²	0,3	-10,9	0,2	-4,5	2,0	-0,2	6,5	1,9	1,8
Tipo de Cambio Real (promedio 1986=100) ³	59,0	70,8	74,0	90,9	100,0	104,3	111,2	108,6	112,7
Inflación (IPC) (dic-dic) ⁴	20,7	23,1	23,0	26,4	17,4	21,5	12,7	21,4	27,3
Superávit Sector Público no Financiero (% PIB)	-3,4	-3,0	-4,3	-2,6	-2,1	-0,2	0,2	1,3	3,6
Términos de Intercambio (1986=100)	112,1	114,3	107,6	99,9	100,0	109,8	125,9	124,3	116,5

n.d.: no disponible.

1 Cambio de metodología en 1992. Se utilizó como deflactor del IPC corregido de Cortázar y Marshall (1980)

2 Cambio de metodología en 1993.

3 Un aumento de este índice corresponde a una depreciación de la moneda local.

4 Para 1974-1978 se utilizó el IPC corregido de Cortázar y Marshall (1980).

5 Definido como precio de exportaciones de bienes y servicios dividido por precio de importaciones de bienes y servicios.

Fuente: Banco Central de Chile. Citado de: Felipe Larraín y Rodrigo Vergara (eds). *La transformación económica de Chile* (Santiago, CEP, 2000), p. 7.

Cabe señalar que las reformas fueron aplicadas por un régimen autoritario, y muchas de ellas implicaron modificaciones a la legislación. Las leyes debían ser aprobadas unánimemente por los cuatro miembros de la Junta de Gobierno, luego de la opinión de comisiones legislativas que integraban personas designadas por el gobierno, entre las que había ex-dirigentes de partidos políticos de derecha, ex-ministros, profesores universitarios y empresarios. Además, no hay que olvidar que la actividad política estaba proscrita -por lo menos hasta comienzos de los ochenta- y las discusiones en las comisiones y la Junta eran el filtro político de las propuestas que hacían los economistas del gobierno. Si bien este proceso legislativo difería mucho de uno democrático formal, de ninguna manera se encontraba cerrado el debate o la confrontación. La política económica era el único campo en el que el Gobierno Militar toleraba la discusión abierta, como se aprecia en diarios, revistas y radios, aunque no en la televisión controlada directamente por el gobierno. En dicha discusión, constantemente se manifestaban críticas a la política económica que formulaban los economistas de gobierno, por parte de empresarios, líderes sindicales, economistas adversos al libre mercado y políticos. De hecho, el debate más importante se produjo entre los propios partidarios del gobierno.

De esta forma, más allá de las críticas y momentos más difíciles, como la crisis económica de los años 1982 y 1983, o de las jornadas de protestas que comienza a vivir el país, lo concreto es que el Gobierno Militar permaneció fiel al ideal de proyectar hacia el futuro una nueva economía, que de hecho siguió rigiendo una vez concluido el gobierno militar, e incluso tuvo una influyente proyección internacional.

Al lado de este cambio central operaba otro en el ámbito político, a través de la elaboración de una Constitución que permitiera renovar las instituciones y consolidar la obra del régimen de una manera más permanente, preparando el restablecimiento de la democracia plena una vez concluido el período de transición.

La Constitución de 1980: tradición chilena, debate y modelo de transición

La Constitución de 1980 es uno de los legados más estables del gobierno militar, sin perjuicio de que fue y sigue siendo discutida. Fue presentada por sus detractores como una “imposición de la dictadura”, que establecía un modelo económico liberal y un sistema que llamaron “un cesarismo presidencial bajo tutela militar”. El Gobierno, por su parte, destacaba su compromiso con la persona humana y las garantías individuales, además de ser una democracia protegida, para evitar el regreso a un modelo marxista por la vía legal.

La Constitución fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980 por el 67,6% de la población en contra del 30,1% que la rechazó.

La oposición desde el comienzo cuestionó su validez, pues es claro que las condiciones de libertad electoral estaban restringidas. La Constitución había tenido un largo trámite pasando sucesivamente por una comisión ad hoc, la denominada “Comisión Ortúzar”; luego el Consejo

de Estado -en el que participó el ex Presidente Jorge Alessandri y que envió un borrador, que después fue modificado por la Junta de Gobierno. Estos cambios fundamentalmente tuvieron relación con la forma en que debía desarrollarse la transición y la situación de los Comandantes en Jefe, lo cual provocó la molestia del ex Jefe de Estado, quien renunció al Consejo al día siguiente del plebiscito a fin de no influir negativamente en su resultado. Finalmente, la Constitución fue aprobada y comenzó a regir el 11 de marzo de 1981, por un período de transición de 8 años, después de los cuales entraría en plena vigencia. El plebiscito incluía la ratificación del General Pinochet como Presidente de Chile, también por otros ocho años.

Hay varios aspectos que pueden ser destacados desde el punto de vista histórico e institucional.

a) *Constitución Política de 1980.* Fue aprobada por el 67,6% de la población, aunque el plebiscito constitucional no fue libre como proceso electoral. Estimamos que la Constitución fue impuesta, básicamente por los mismos argumentos que esgrimió el ex Presidente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán, en el acto de la oposición para rechazar el texto. Lo interesante desde una perspectiva comparada es que para la Constitución de 1925, texto vigente hacia 1973, menos de la mitad de la población concurrió al plebiscito constitucional y dicho texto también fue impuesto en la dictadura cívico-militar de Arturo Alessandri. El dato es importante, pues muchos plantean que el 11 de septiembre de 1973 puso fin a una “larga” tradición democrática en Chile, lo que tiene sus matices. Por lo demás, algunos de los principales partidos políticos rechazaron la forma como se convocaba al país a pronunciarse en 1925, como fue el caso del Partido Radical, el Conservador y el Comunista.

b) *Elecciones presidenciales.* Una de las reformas sustanciales de la Constitución de 1980 establece que será Presidente quien obtenga la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, y si nadie lo logra, se desarrollará una segunda vuelta, en uno de los avances democratizadores (“enclave libertario”) más importantes de la historia chilena. Sin considerar el plebiscito presidencial de 1988, desde 1989 en adelante el país ha observado la realización de tres elecciones presidenciales con varias novedades que han profundizado la participación política respecto a las desarrolladas entre 1925 y 1970. En primer lugar, han participado numerosos candidatos: tres en 1989, seis en 1993 y otros seis en 1999. En segundo término, varios candidatos han sido novedosos, tales como humanistas y verdes, independientes de izquierda, de centro y de derecha, abriendo las alternativas (aunque no tuvieran posibilidades de triunfo). En tercer lugar, dos mujeres han sido candidatas presidenciales, en las elecciones de 1999, inaugurando una nueva característica de los procesos chilenos. En cuarto término, y esto es lo más importante, los tres presidentes de la Concertación han gozado de legitimidad democrática, por haber sido elegidos con la mayoría absoluta de los votos, más del 50% del electorado (en las elecciones de 1999-2000 bajo el sistema de la segunda vuelta). En esto hay una diferencia sustancial con los Presidentes electos bajo la Constitución de 1925 que, como Gabriel

González V., Jorge Alessandri y Salvador Allende, llegaron al poder con sólidas “minorías”, estos dos últimos con el 31,18% y 36,22% respectivamente.

c) *Modelo económico.* El modelo económico establecido en el Gobierno Militar fue resguardado constitucionalmente (otro “enclave libertario”). El texto de 1980 produjo una ampliación de las libertades cotidianas, sobre todo mediante las actividades y materias que pasaron a ser parte de la libertad económica: la educación universitaria, los canales de televisión, la inversión publicitaria, la producción académica y editorial, por nombrar algunas. Por otro lado, la estabilidad de la propiedad y del modelo en general fue protegida con una legislación y mediante los mecanismos constitucionales correspondientes, vinculando estrechamente los conceptos de propiedad y libertad. Particularmente notoria es la defensa de los derechos fundamentales en el capítulo III de la Constitución, el cual considera también un recurso de protección para hacer efectivos esos derechos.

d) *El problema militar.* Uno de los aspectos que más ha dado que hablar en materia de “enclaves autoritarios” es la presencia - supuesta o real - de los militares en actividades políticas. Esto se manifestaría tanto por los senadores designados de origen militar, como por la composición del Consejo de Seguridad Nacional (originalmente con mayoría militar, hoy en paridad con las autoridades civiles). Otro aspecto cierra el círculo: entre las funciones de las Fuerzas Armadas, la Constitución destaca que son “garantes del orden institucional de la República”. Las tres cosas deben mirarse en perspectiva, y no de manera aislada. En el caso de la participación política de los militares en el Congreso, obviamente está sujeta a reforma que elimine los senadores designados⁶, pero en cualquier caso esa influencia es considerablemente menor que la que tuvieron antes de 1973, cuando formaron varias veces parte del Gabinete del Presidente Allende, quien involucró a las Fuerzas Armadas en política contingente. En cuanto al Consejo de Seguridad Nacional -aunque impropio de las democracias occidentales- es una institución que parcialmente existía antes de 1973 (el CONSUSENA, Consejo Superior de Seguridad Nacional), cuyas funciones se refieren a esa materia y que en parte fue reformado en 1989; ha sesionado en los años '90, incluso citado por el Presidente Eduardo Frei R-T., sin que se pusiera en riesgo la autoridad civil ni hubiera intervención política de los uniformados. Por último, el carácter de “garantes del orden institucional” sólo presenta como novedad el hecho de estar expresamente establecido en la Constitución, por cuanto antes de 1973 era algo aceptado, también expresamente (aunque no en el texto constitucional), dentro el ambiente político y por diversos sectores. Por lo demás así había sido también antes de la Constitución de 1925 y en crisis como la guerra civil de 1891.

También está la condición de inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las FFAA y General Director de Carabineros. Ello tiene dos dimensiones de distinta consideración: por una parte el Presidente de la República no goza de la libertad para nombrar y remover a un determinado Comandante en Jefe del Ejército; por el otro, esta misma situación garantiza la no politización de las cabezas de las instituciones armadas.

Sin embargo, quizá el aspecto más interesante del régimen constitucional de 1980 fue la auto limitación del propio Gobierno, quien fijaba fecha para su término y para el restablecimiento de la democracia, por lo cual puede hablarse de una dictadura o gobierno autoritario pre-democrático.

No está de más decir que el itinerario constitucional fue el que se llevó a cabo en la segunda mitad del Gobierno Militar y que los gobiernos siguientes han actuado bajo el marco establecido en la misma constitución.

Violaciones y abusos en materia de derechos humanos

El problema de los derechos humanos no es nuevo en Chile. Lejanamente, la guerra civil de 1891 dejó una inmensa secuela de denuncias sobre torturas, asesinatos y persecuciones, de hecho las estimaciones calculan entre 5.000 y 10.000 las víctimas de esta guerra. A comienzos del siglo XX hubo varias matanzas obreras, con cientos de muertos producto de la represión. En 1938 fueron asesinados más de medio centenar de jóvenes nacistas en el Seguro Obrero. El Partido Radical en el poder fue acusado de manera feroz cuando se inició la persecución a los comunistas en 1948. Más cerca en el tiempo, la izquierda había denunciado las matanzas del gobierno de Eduardo Frei Montalva, así como las torturas que hubo en dicho gobierno⁷. Las mismas críticas se volvieron contra la Unidad Popular una vez que ésta estuvo en el poder, como lo declaró la Cámara de Diputados en su Acuerdo de agosto de 1973: el gobierno “ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas”.

Sin embargo, sólo fue bajo el Gobierno Militar que el tema se hizo habitual, el problema más masivo y la crítica más demoledora. A ello se sumó la vista gorda de la autoridad frente a las denuncias que hubo después del 11 de septiembre sobre torturas, muertes o desapariciones.

El empleo de la violencia está estrechamente vinculado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y a su director el Coronel Manuel Contreras. Organismo creado por iniciativa del general Pinochet por Decreto Ley N°521 del 14 de junio de 1974, con el objetivo de ser el principal instrumento en la guerra contra el marxismo, reclutando personal de las FFAA y de Orden, así como personal civil y ex adeptos de la UP a quienes utilizó como informantes. Fue definida como “un organismo técnico profesional”, dependiente directamente de la Junta de Gobierno, al que le correspondía “reunir toda la información de nivel nacional proveniente de

⁶ Hacia comienzos del 2003 hay un acuerdo sustancial en todos los sectores políticos sobre la necesidad de eliminar a los senadores designados y vitalicios de la Constitución.

⁷ El propio ex ministro Edmundo Pérez Zujovic fue víctima de la venganza de la izquierda, en tanto que Víctor Jara cantó recordando la matanza de Puerto Montt.

los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiere para la formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país”.

Inicialmente se concibió como una organización que asesoraba a la Junta de Gobierno, sin embargo, se convirtió en una entidad de apoyo a la consolidación del poder personal de Pinochet.

Este organismo combatió a los grupos de izquierda, a las organizaciones opositoras, a entidades de la Iglesia Católica e incluso vigiló y fue hostil con algunos de los principales asesores del propio gobierno, principalmente del sector “blando” (gremialistas y Chicago Boys). En tanto que sus acciones no sólo se limitaron al interior del país, sino también al exterior - Argentina, Estados Unidos, Italia - creando un clima de miedo en los grupos opositores y de temor entre los colaboradores del gobierno. Se convirtió en el símbolo del carácter represivo del régimen militar.

Junto a las tareas de inteligencia, la DINA fue facultada para realizar allanamientos y detenciones, sin que fuera necesario para ello de disponer de una orden judicial (art. 10 secreto), y desde el comienzo dispuso de centros de detención en los que se aplicó la tortura a consecuencia de la que murieron numerosas personas, que pasaron a ingresar la larga lista de los detenidos-desaparecidos.

La DINA fue disuelta en 1977 y fue sucedida por la Central Nacional de Informaciones (CNI), su sucesora, que sin duda fue más débil. Pero la DINA consiguió dismantelar al PC, debilitó severamente la organización clandestina del PS y destruyó al MIR, lo cual le permitió gozar de la confianza del general Pinochet, quien mantuvo a Contreras en la dirección por cuatro años removiéndolo debido a la presión del Gobierno de USA, a raíz de la participación de agentes de la DINA en el asesinato de Orlando Letelier en 1976.

En síntesis, como bien lo ha descrito Carlos Huneeus en su libro *El régimen de Pinochet*, este organismo contribuyó a consolidar el poder de Pinochet, pero se volvió en su contra provocando los mayores rechazos en el país y en el exterior, “siendo la causa fundamental de la condena internacional al régimen militar y de la mantención de la memoria histórica condenatoria de ese período, que explica la detención de Pinochet en Londres”.

Con todo, es necesario destacar que el problema de los derechos humanos sólo fue asumido por el país después de 1990, una vez que los militares dejaron el poder. Este es un aspecto importante, pues pese a la ley de amnistía de 1978 por la cual se indultaron los excesos de ambos bandos, el hito central fue el Informe de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, creada por el Presidente Aylwin, que emitió el denominado Informe Rettig, que precisaba las violaciones a los derechos humanos que significaron muerte o desaparición de personas.

Cuadro N°4
Decisiones tomadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación

Víctimas de violaciones de los derechos humanos	2115
Víctimas de la violencia política	167
Total	2282
Casos en que la Comisión no pudo formarse convicción	641
Total casos	2923

Fuente: *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*. Resumen publicado en *Estudios Públicos*, N°41, 1991: 441-442.

El retorno a la democracia significó una situación ambigua respecto del tratamiento del tema: ley de amnistía con juicios que continuaban, manto de olvido con denuncias públicas, deseos de ocultar y de saber, informes y comisiones de trabajo. La tradicional amnistía, la "vía chilena de reconciliación política", adoptaba un carácter más multiforme y complejo.

La década ganada: El camino hacia la democracia

La década del '80 marcó un cambio en varios sentidos. Desde luego estaba vigente una parte de la Constitución de 1980 y con ella el itinerario de transición a la democracia. También hubo una importante crisis económica mundial que puso en jaque al modelo chileno.

Efectivamente, en agosto de 1982, precisamente en el mes en que asumió como biministro de Hacienda y Economía Rolf Lüders el presidente mexicano José López Portillo intervino la banca privada y suspendió todas las operaciones, provocando la cesación de pagos por parte de dicho país. Esto implicó que la banca internacional, ante el miedo que el resto de los países asumieran la misma actitud, cortara los créditos hacia los países endeudados lo que afectó gravemente a las economías latinoamericanas. En Chile, en los primeros siete meses de 1982 entraron U\$1,236 millones pero salieron por intereses y amortizaciones U\$1,148 millones. Las reservas cayeron en U\$1,000 millones y la demanda de divisas fue altísima. El FMI suspendió aquel mes un crédito al país por U\$850 millones, pero la señal enviada al mercado era pésima ya que las fuentes de crédito externo, más sensibles por la crisis, también cortaron los flujos hacia Chile. El resultado fue un año 1982 con magros indicadores macroeconómicos: Crecimiento: -13,4% (1981: 6,7%); Desempleo: 19,6% (1981: 11,3%), Inflación 20,7% (1981: 9,5%).

Las consecuencias de la crisis fueron una devaluación del peso que afectó gravemente a los deudores en dólares, entre los cuales se contaban los grandes grupos económicos tales como Vial y Cruzat-Larraín. Estos problemas pusieron en riesgo la estabilidad de los bancos que les prestaron dinero, e incluso en algunos casos eran propiedad parcial o total de los mismos afectados. Dos de estos bancos, el Chile y el Santiago, eran importantes centros financieros cuyo derrumbe podía significar una catástrofe económica para el país, pero la crisis financiera se hacía también extensiva a otras entidades tales como financieras y bancos de menor tamaño.

El gobierno, temeroso que la deuda de dichos grupos con sus bancos relacionados creciera hasta hacerse inmanejable, decretó la sorpresiva intervención de la banca el 13 de enero de 1983, lo que significó intervenir a cinco de ellos, liquidándose dos y una financiera, además de decidir una administración provisional para otros. En forma simultánea se paralizaron por tres días las operaciones de la banca. Esto significó que las empresas de los

diversos grupos también entraron en crisis debido a sus dificultades financieras y tener impedido el acceso a más recursos, lo que trajo en definitiva un verdadero terremoto financiero, quizás el más grave en la historia económica de Chile.

Otro tema de la mayor importancia se refiere la resurrección de la “sociedad política” en Chile, que comenzó con el plebiscito constitucional y siguió con ocasión de la reorganización de la oposición y el inicio de las protestas masivas de principios de la década de los ochenta. Situación en que ciertos actores - como por ejemplo el movimiento estudiantil y las organizaciones sindicales y gremiales - fueron recuperando su presencia en la política nacional. Este activismo social apareció con las protestas de 1983-1986. Sin embargo, en el momento en que se desarrollaron las violentas manifestaciones callejeras, la participación de la clase media se retrajo a otro tipo de participación, pues la oposición -tras vivir un período de aprendizaje político- optó por enfrentar al régimen con las mismas armas que éste le entregaba, básicamente dentro del esquema de la Constitución de 1980, y siempre bajo vías pacíficas de participación⁸.

Efectivamente, para la oposición, la Constitución de 1980 era la culminación de una parte del proceso de institucionalización autoritaria, y en torno a este hecho se produjo una cierta re-politización en las altas esferas partidistas, aunque no debemos olvidar que ello se hacía en un momento muy favorable para el régimen, desde el punto de vista de sus logros económicos consecutivos por casi 5 años. Pero la crisis de 1981 y 1982 sacudió el aura de invencible del Gobierno Militar, lo que fue el detonante de una ola de protestas sociales, articuladas por el mundo sindical, estudiantil y político de la oposición, reflejo de un amplio espectro nacional.

Las protestas fueron jornadas de gran participación ciudadana, que en alguna medida recordaban la masiva oposición al gobierno de la UP, aunque con nuevos tiempos y actores también distintos. Muchos sectores opositores confundieron la situación con una crisis terminal, lo que significó que el gobierno optara por una incipiente apertura. Pero el desastre económico producido por la crisis de la deuda no trajo la caída del régimen militar, pese a que la persistencia de las protestas mensuales presagiaba una inminente caída, y en muchas partes se escuchaba el “¡y va a caer, la dictadura va a caer!”. A medida que pasó el tiempo la percepción de la inminente caída del régimen cedió paso a un debate estratégico, aunque poco realista. La idea era que el proceso de movilizaciones era capaz, por sí solo, de crear una situación de ingobernabilidad o desestabilización del régimen que llevaría a que las FFAA se desprendieran de Pinochet y negociaran con los civiles su retiro del poder. Para otros, era producir un colapso con un retiro automático de las FFAA, donde los civiles llenarían el vacío de poder. Mientras que sectores más ligados al centro y la izquierda fueron llamados por el entonces Arzobispo de Santiago, Cardenal Juan Francisco Fresno, a negociar con el régimen en agosto y septiembre de 1983. Este impulso fracasó, pues plantearon que la salida de Pinochet era una condición para cualquier negociación, lo que era inviable para las FFAA y para el cumplimiento del itinerario constitucional. La oposición asumió la fórmula de la salida a

⁸ Al decir de Manuel A. Garretón, debemos entender la acción y evolución de la oposición política como un proceso de aprendizaje de una clase política, cuya formación, práctica y memoria histórica le permitían gobernar u oponerse a

Pinochet, gobierno provisional y Asamblea Constituyente, declarando la ilegitimidad de la Constitución de 1980, al tiempo que llamaron a la movilización social.

Por parte del gobierno, a comienzos de 1983 se designó una comisión -presidida por Sergio Fernández- para el estudio y propuesta de quince anteproyectos de leyes orgánicas que debían complementar el texto constitucional. La reacción fue que muchos dudaron que el Jefe de Estado permitiera el restablecimiento de un régimen democrático con autoridades elegidas por el pueblo. Sin embargo, Pinochet se adhirió a la Carta Fundamental y al itinerario que ella contemplaba.

Desde ese punto de vista, la nueva institucionalidad se estructuró lentamente, impulsada por el gobierno y a través de civiles preocupados por transitar a la democracia. En ese clima convulsionado de protestas, asumió en 1983 el Ministerio del Interior Sergio Onofre Jarpa, quien llevó adelante una apertura política que fortaleció al gobierno en aquellos momentos difíciles de la crisis. La llamada “fórmula Jarpa”, pretendía adelantar las leyes políticas para que entrara en funcionamiento el parlamento antes de lo establecido. Sin embargo, la tesis que prevaleció fue la de avanzar en forma más lenta, aunque permitió abrir el camino del diálogo entre gobierno y oposición. Estos diálogos se llevaron a cabo en agosto de 1983 a través de la conformación de la Alianza Democrática (que reunía a grupos pequeños de derecha, la DC, otros partidos de centro menores y algunos socialistas). Además se formaron el Movimiento Democrático Popular (socialistas, PC, MIR) y el Bloque Socialista (que intentaba más bien la unidad socialista e incluía a la Izquierda Cristiana y al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).

En agosto de 1985 surgió la más importante propuesta alternativa de transición política: el “Acuerdo Nacional para la transición a la plena democracia”, que tuvo su origen en gestiones de la Iglesia Católica, concretamente por el Cardenal Fresno, y una comisión compuesta por Fernando Léniz, Sergio Molina y José Zabala, a la que se sumaron actores de la oposición “democrática” y algunos partidarios del Gobierno Militar pero no de la continuidad del general Pinochet, y más proclives a acelerar la redemocratización del país⁹. El gobierno consideraba el Acuerdo como una maniobra de los políticos para desestabilizarlo y alterar el rumbo trazado por la Constitución, aunque lo peor era aparecer utilizando a la Iglesia para esos propósitos. Sin embargo, a la postre, el Acuerdo permitió un acercamiento entre las distintas corrientes políticas, tanto de gobierno como oposición democrática -se excluyó por ello a los comunistas-, que fueron facilitando la construcción de los consensos necesarios para transitar pacíficamente a la democracia. Por primera vez, se miró el futuro de Chile con la impresión de que tanto las opciones políticas como económicas que se debatían serían más moderadas que aquellas que generaron tantas divisiones en el pasado.

gobiernos democráticos y no a gobiernos autoritarios, de ahí que es algo totalmente nuevo. Véase su artículo “Aprendizaje y gobernabilidad en la redemocratización chilena”. *Nueva Sociedad*. 128: 148-157.

⁹ Los firmantes del Acuerdo Nacional de agosto de 1985 fueron los de derecha, Andrés Allamand, Francisco Bulnes, Hugo Zepeda; los demócratacristianos Patricio Aylwin, Gabriel Valdés; los radicales y socialdemócratas Enrique Silva, René Abeliuk; y los de izquierda no comunista, Carlos Briones, Ramón Silva.

Tal como señalamos, la crisis económica golpeó fuerte al país. Los indicadores son elocuentes: cesantía 19,6% en 1982, cientos de quiebras de empresas, críticas agudas contra el modelo liberal, cambios de timón en el gobierno, agudización de las protestas públicas, planes de empleo especiales del Estado, entre otros. Algunos llamaron a terminar con el gobierno militar en 1986, “el último año de Pinochet”. Pero el gobierno siguió. En ese año, el 11 de agosto, se descubrió un cuantioso arsenal en la zona norte del país, Carrizal Bajo, internado de manera clandestina, proveniente de Cuba, destinado a ser usado contra el gobierno. Por entonces, ya se había decidido intentar asesinar al primer mandatario, ataque que se desarrolló el 7 de septiembre de ese año, cuando el brazo armado del Partido Comunista, el denominado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) emboscó a la caravana en la que viajaba Pinochet. La operación falló, aunque murieron cinco escoltas del gobernante y el país se vio hondamente conmovido, pues la mayoría de los chilenos creía sin dudas en una transición pacífica, más allá de su adhesión u oposición al gobierno.

Finalmente, en 1986, ante la necesidad de retomar las movilizaciones sociales que habían ido perdiendo fuerza, y ante la incapacidad del acuerdo político entre los partidos, se buscó un nuevo mecanismo de concertación de la oposición, dando origen a la Asamblea de la Civilidad que presentó *La demanda de Chile*. Sin embargo, sus discrepancias políticas reaparecieron con ocasión del descubrimiento de los arsenales y el atentado contra el general Pinochet, lo que le hizo perder su unidad y capacidad de convocatoria.

Desde el punto de vista del régimen, el período se caracterizó por la implementación de la institucionalidad que aseguraba el itinerario de la Constitución, con la promulgación de las leyes políticas complementarias a la Carta Fundamental (ley de partidos políticos, registros electorales, votaciones y escrutinios, etc.). En lo económico, el gobierno reaccionó introduciendo una serie de ajustes al modelo económico liberal, pero en ningún caso descartó sus fundamentos básicos. Así, en 1985, la economía iniciaba un proceso de notable recuperación, liderado por el Ministro de Hacienda Hernán Büchi.

Los éxitos y fracasos del modelo de economía abierta definieron el marco en el cual se plantearon los principales debates y cuestiones que delimitaron el perfil de la transición. Además, como consecuencia de la crisis y del posterior ajuste de la economía, se detectaron algunas fisuras al interior de los propios partidarios del gobierno. Es así como ciertas elites económicas hicieron público su descontento. Una pequeña, pero activa autodenominada “derecha democrática” hizo su aparición y volcó sus esfuerzos a la promoción de la liberalización política, lo que entre 1983 y 1988, fue expandiendo gradualmente el espacio abierto para la expresión y la actividad públicas. Aunque más importante fue que en el seno de los altos mandos de las FFAA y de Orden se empezó a hacer manifiesto un cierto descontento ante la perspectiva de una perpetuación de Pinochet en el poder, aunque el Ejército se mantuvo monolíticamente leal a su Comandante en Jefe.

A partir del período pre-plebiscitario, los partidos políticos fueron asumiendo de manera creciente el control de la discusión entre los diferentes sectores, lo cual generó de parte de los diferentes actores una fuerte preocupación ante la posibilidad de que sus intereses específicos

se viesan paulatinamente sumergidos por la preponderancia de los objetivos político-partidarios. En ese sentido, al igual que en otras transiciones, parece posible que el peso propio de los nuevos movimientos sociales se evaporó en la medida que los partidos políticos fueron asumiendo un papel protagónico.

En el caso de la Iglesia Católica, ésta siguió siendo en los años ochenta un importante apoyo para los más pobres, aunque abandonó su papel de protectora de la oposición para permitir que los partidos políticos tomaran el papel principal. Cabe recordar que a lo largo de los setenta, fue esta institución la que se constituyó en el principal refugio para los perseguidos políticos, al tiempo que ofreció ayuda a quienes sufrieron los costos del programa económico. En ese sentido, la Vicaría de la Solidaridad, creada en 1976, prestó asistencia legal a las “víctimas de la represión”, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia al gobierno.

Tras el retorno de los partidos políticos la Iglesia siguió siendo un apoyo eficaz al proceso de transición, continuó exhortando a la unidad de las fuerzas opositoras y exigiendo -en la medida que se aproximaba- que el plebiscito fuese honesto y transparente. Así, en la medida que la transición cumplía sus etapas, la Iglesia se fue replegando hacia una postura cada vez más neutral, pero siempre velando por el carácter pacífico de la transición.

Un hito central de la historia de Chile en el período fue la visita a Chile de Su Santidad el Papa Juan Pablo II quien llegó al país el 1° de abril de 1987 permaneciendo hasta el 6 del mismo mes. El Papa contaba con una inmensa popularidad en Chile, derivada de la tradición católica del país, pero también de la acción que le cupo en preservar la paz con Argentina, al promover acuerdos limítrofes que finalmente se llevaron a cabo¹⁰. Momentos importantes de su estadía en Santiago fueron la bendición a Chile a los pies de la Virgen ubicada en el Cerro San Cristobal, sus reuniones con jóvenes, el clero, políticos, intelectuales y pobladores. También la reunión con Pinochet a solas en el Palacio de Gobierno y el saludo que junto al primer mandatario dio, desde su balcón, a los miles de fieles reunidos que deseaban verlo. También la Misa en el Parque O'Higgins, recordada por la beatificación de Sor Teresa de los Andes, pero también por las violentas manifestaciones que desataron algunos de sus asistentes. Además el Papa realizó viajes al sur y norte del país.

Otros ámbitos cruciales de la vida política y cultural, también se caracterizaron por el cambio y la continuidad. Algunos sectores estudiantiles, por ejemplo, se radicalizaron fuertemente, mientras otros abandonaron la retórica revolucionaria de los sesenta. Aparecieron diversos centros de investigación en ciencias económicas, políticas y sociales, muchos creados en los años setenta, pero que florecieron en los ochenta, desempeñando un papel importante como centros intelectuales que generaban información, crítica y estrategias dirigidas contra el régimen militar. En el plano literario se escribieron interesantes obras que mostraban las

¹⁰ Efectivamente, el gobierno consiguió firmar el 29 de noviembre de 1984 en la Sala Regia del Palacio del Vaticano, un tratado de Paz y Amistad con la nación trasandina gracias a la mediación de su Santidad el Papa Juan Pablo II, quien medió en un conflicto entre ambos países por la disputa de las islas Picton, Lennox y Nueva al sur del canal Beagle y que estuvo al borde de convertirse en una guerra en diciembre de 1978. En este sentido, debe destacarse como el general Pinochet supo mantener la calma durante todo el período, sin alarmar en exceso a los chilenos, a diferencia de sus pares argentinos que estaban preparándose “públicamente” para el enfrentamiento. Al respecto, también es importante recordar las figuras del Cardenal Samoré, enviado especial del Papa y del Canciller chileno Hernán Cubillos; el Jefe de la Delegación Chilena, Ernesto Videla y del diplomático Enrique Bernstein.

consecuencias del autoritarismo en la sociedad chilena. El teatro callejero y escénico volvió a convertirse en instrumento de análisis social e incluso la letra de canciones de grupos musicales como *Los Prisioneros* -sin duda el más importante de la década- convocaron a la juventud a luchar por ciertos ideales sociales cantando: “muevan las industrias”, “pateando piedras” o “por qué no se van del país”. De esta forma se conformó una verdadera cultura opositora alternativa, mientras los partidos políticos buscaban la forma de reorganizarse.

Pero también las ideas nuevas contaron con fuerza en la difusión pública, tal como lo reflejaron -según vimos anteriormente- las revistas *Economía y Sociedad* (del ex Ministro y uno de los artífices de las modernizaciones, José Piñera), *Realidad* (de Jaime Guzmán) y *Estudios Públicos* (del Centro de Estudios Públicos), más el diario *El Mercurio*, todos ellos reflejo de la promoción de una “sociedad libre”.

En medio de esa resurrección de los partidos políticos es importante señalar que ellos llegaron a su punto más bajo a fines de los setenta, cuando se hallaban fuertemente “golpeados” por las medidas del gobierno -el receso político- y por sus mensajes contrarios a los “politiqueros”. A pesar de ello, a partir de las protestas de 1983 fueron capaces de reactivar una interesante y vital cultura política. Sin embargo, la configuración política había cambiado, básicamente para construir dos fuerzas dominantes, en oposición a los tres tercios de 1970. La política quedó dividida entre los partidarios y antagonistas del Gobierno Militar: la derecha se hallaba dominada por Unión Nacional, el Frente Nacional del Trabajo (ambos más tarde en Renovación Nacional), la Unión Demócrata Independiente (de breve paso por RN, pero que continuaría como partido autónomo en democracia) y por el grupo nacionalista Avanzada Nacional (AN). La DC, originariamente partidaria del 11 de septiembre, derivó en la más importante voz de la oposición, imperando en la centro-izquierda. En tanto que algunos Socialistas más moderados, representados por el Partido Por la Democracia (PPD), competían entre ellos y con el PC y el MIR, agrupados en el Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS), por obtener la hegemonía de la izquierda. Sin embargo, tras esta aparente continuidad -y resultado del aprendizaje político que implicó la redemocratización- había cambios profundos, como la renovación de la DC (fundamentalmente en el plano económico) y de los socialistas, mientras que los comunistas tomaron posiciones más radicales.

Efectivamente, la evolución ideológica y política de los partidos marxistas determinaron la formación de nuevas coaliciones, que rompieron el mapa previo a 1973. Quizá el cambio más importante se dio al interior del Partido Socialista, el cual evolucionó hacia posturas favorables a la democracia política, que dejaba atrás utopías como la “dictadura del proletariado” o la defensa de los socialismos reales. A ello se sumó la renuncia explícita a las vías violentas de acceso al poder, que el PS había proclamado en 1967 en su Congreso de Chillán. Además, el PS se abrió a reconsiderar el “problema de la propiedad”, con lo cual se abandonaban décadas de estatismo y de favorecer posturas expropiadoras, además de avanzar hacia un consenso en materia económico-social, por lo que significaba dejar atrás posiciones ideológicas de décadas. En gran medida el socialismo fue adoptando estas posturas a medida que se producían cambios en el panorama internacional y las potencias tendían a liberalizarse, a la vez que el

fracaso del comunismo, evidente para muchos desde comienzos de siglo, era percibido por sectores cada vez más amplios de la sociedad.

En el plano internacional, el gobierno militar tuvo desde el principio poderosos detractores. Desde luego, a través del bloque internacional del marxismo, pero también de países europeos de tradición democrática y, más tarde, incluso de los Estados Unidos (que había apoyado el derrocamiento de la Unidad Popular). Durante los '80, el ámbito internacional jugó un papel secundario, si se le compara con los procesos internos, aunque tuvo influencia. A lo largo de la década de los ochenta los EEUU jugaron a favor de la oposición de una manera más limitada que en la época de Allende, pues se trataba de influir en Pinochet, pero no de derrocarlo. Así, a lo largo del proceso de transición, los EEUU junto a algunos países de Europa Occidental, establecieron un equilibrio entre una cierta satisfacción por el modelo económico y su crítica al carácter represivo que lo implementó. Entre todos contribuyeron al restablecimiento de la democracia, si bien de acuerdo a los plazos fijados por el Gobierno Militar.

La última etapa: el plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989

De acuerdo a lo establecido en la Constitución, correspondía llamar a plebiscito en 1988, con el objeto de determinar la continuidad del gobierno o la convocatoria a elecciones abiertas, plurales. A la oposición le costó aceptar la idea del plebiscito: frente a ella, surgió un grupo encabezado por Sergio Molina que planteó la fórmula de las elecciones libres (en este proceso emergió como figura política Eduardo Frei R-T., hijo del ex Presidente)¹¹. Sin embargo, la idea no prosperó, fue rechazada por el gobierno, ante lo cual la oposición decidió participar, inscribir ciudadanos, organizar partidos políticos, preocuparse del conteo de resultados del plebiscito: en definitiva, ser parte de la institucionalidad. Respecto de la inscripción legal de los partidos políticos, requisito para participar en actos electorarios o plebiscitarios, la ley fue promulgada en 1986 (Registro Electoral) y en febrero de 1987 se inició el proceso de inscripción. Más allá de la discusión por parte de la oposición en torno a la ilegitimidad de la ley, la propuesta inicial de un sector de la izquierda socialista de inscribir un solo partido de la oposición para enfrentar al régimen fue desechada, porque prevalecieron las identidades partidistas históricas. Así, los partidos de centro y de derecha se inscribieron con nombres tradicionales, en tanto que uno de los partidos socialistas con otros sectores de izquierda no partidistas inscribieron al Partido por la Democracia (PPD, que incluía unos pocos miembros de la derecha y el centro político) que se definió como de carácter instrumental para enfrentar cualquier elección contra el gobierno de Pinochet; la figura indiscutible de este partido era Ricardo Lagos, cuya influencia sería creciente¹².

El proceso de aprendizaje político culminó el 2 de febrero de 1988, cuando los opositores firmaron la "Concertación por el No", la cual aglutinó a diecisiete partidos políticos (en realidad

¹¹ Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue elegido Senador por la Región Metropolitana Oriente en 1989; más tarde Presidente de su Partido Demócrata Cristiano y finalmente Presidente de la República (1994-2000). Al dejar el poder asumió como Senador Vitalicio.

¹² Ricardo Lagos fue candidato a senador en 1989, por la Región Metropolitana Poniente, pero no resultó elegido. Luego fue uno de los Ministros más destacados en los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei R-T. Finalmente, fue elegido Presidente de la República para el período 2000-2006.

eran sólo cuatro o cinco partidos estructurados y las otras sólo agrupaciones menores que después desaparecerían). Después del plebiscito, esta tomaría el nombre de “Concertación de Partidos por la Democracia”¹³. Por primera vez, los partidos opositores -incluido el PC, aunque al margen de la Concertación- se plegaban a la misma estrategia para enfrentar al gobierno, lo que implicaba varias etapas. La primera, era convertir esa mayoría social en mayoría política y posteriormente en mayoría electoral, y luego precisar, consensualmente, el significado que se le otorgaba al Plebiscito. Al mismo tiempo, había que asegurar una organización y conducción única de la campaña, que diera cuenta de las sensibilidades y tendencias que convergían en la postura del No. Junto a ellos, se organizaban diversas agrupaciones de los más diferentes sectores, los cuales realizaban sus propias actividades de movilización, aunque de hecho estaban subordinadas a la conducción política de los partidos.

El 30 de agosto de 1988, los Comandantes en Jefe de las FFAA y de Orden eligieron a Pinochet como candidato a Presidente de la República para el plebiscito que debía realizarse el 5 de octubre de ese año. Para legitimar dicho proceso, la Junta se aseguró que la elección fuese limpia. Por tanto se hizo hincapié en la conveniencia de una inscripción electoral masiva, que llegó a cerca del 92% de los votantes potenciales. También se levantaron los estados de excepción, se permitió el retorno de los exiliados y durante cuatro semanas las opciones Sí y No tuvieron acceso a una franja gratuita de televisión de quince minutos diarios cada una. Asimismo, el acto electoral fue diseñado de manera de hacer imposible el fraude, permitiéndose que observadores extranjeros y apoderados de la oposición pudiesen vigilar el acto, al tiempo que todas las urnas de votación eran transparentes.

La estructura entre dos alternativas de elección, facilitó que la oposición olvidara sus numerosas diferencias internas para unirse en torno a aquello en que estaban de acuerdo: el No a Pinochet. Al mismo tiempo, la oposición realizó un amplio operativo tendiente a velar por el cumplimiento de los resultados, que iban desde la preparación de sus apoderados de mesa hasta la implementación de un moderno sistema de computación -financiado con ayuda internacional- que permitiría ir entregando los resultados rápidamente y detectando cualquier intento de alteración de los mismos.

La campaña del No fue conciliatoria y apuntó a disipar temores y convencer a la ciudadanía que dicha opción no comprometería su seguridad personal. Era una campaña más entretenida, que llegó más a la población, motivadora, entendible, dinámica y optimista. En definitiva, su slogan “Chile, la alegría ya viene”, se hizo más creíble y apropiado para una campaña política. En contraste, el Sí hizo el esfuerzo por reactivar los temores latentes a un retorno de los conflictos de la época de la UP, apoyado en un férreo anticomunismo que presentó la elección entre caos y orden, en donde este último fue asimilado al general Pinochet, quien apareció como benefactor y protector, una especie de figura tutelar de la sociedad chilena.

No corresponde en este artículo extenderse más sobre este episodio ni al desarrollo de la campaña, de manera que sólo digamos que el resultado final fue el triunfo del No con el

¹³ Los partidos principales que la integraron y que plantearon su voluntad de convertirse en coalición de gobierno con un candidato único presidencial fueron: DC, PR, PSD, PS Nuñez, PS Almeyda, Partido Humanista, PPD, Partido

54,71% contra un 43,01% obtenido por el Sí. De esta forma, a raíz de su derrota y considerando lo establecido por la propia Constitución en su disposición N°29 del articulado transitorio, se prorrogó el período presidencial por un año más, durante el cual se convocaría a elecciones simultáneas de Presidente de la República y de Congreso Nacional. De ahí que el Plebiscito de 1988 permitiera que Chile pasara de un autoritarismo a una democracia. Hay quienes señalan que hubo un sector extremo del gobierno o partidarios de éste que abrigaban la esperanza de poder impedir el proceso de transición y que fuese más allá de la consolidación de una democracia “protegida”. Sin embargo, lo concreto es que el gobierno respetó el itinerario constitucional.

El único cambio en este itinerario y como resultado de arduas negociaciones entre la oposición, el gobierno y Renovación Nacional, fue que se acordó introducir una serie de modificaciones en un conjunto de disposiciones contenidas en la carta fundamental, las cuales fueron aprobadas en un plebiscito en julio de 1989. Estas permitieron, entre otras cosas, equiparar la representación de los civiles con los uniformados en el Consejo de Seguridad Nacional, se eliminó el artículo 8° (que proscribía al comunismo de la actividad política nacional), se aumentó el número de senadores de elección popular (de 26 a 38 sobre un total de 47) y, sobre todo, se facilitó los mecanismos para reformar la propia Constitución. Finalmente, el período presidencial del Presidente elegido en diciembre de 1989, se reducía por una sola vez a cuatro años, es decir la mitad de su duración normal de ocho años contemplado por la Carta Fundamental.¹⁴

Más allá de los cambios concretos, quizás lo más importante es que dieron a la reformada Constitución de 1980 -por parte de la oposición- un reconocimiento de legitimidad que hasta ese momento carecía al aceptar sus planteamientos, independiente de si luego se plantearan nuevas modificaciones. El masivo apoyo que tuvieron por parte de la ciudadanía, quien las aprobó con un 86%, significó que en la sociedad chilena ya primaba un criterio consensual y centrista que permitió ir afianzando las bases de la consolidación democrática en el país.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989

Tal como señalaba el itinerario constitucional, tras el triunfo del No, se celebraron en diciembre de 1989 elecciones presidenciales y parlamentarias, por primera vez después de casi dos décadas, escogiéndose las autoridades que reemplazarían al Gobierno Militar. La simultaneidad de dichas elecciones produjo un efecto de *elección sin perdedores* en la medida que ciertos sectores de derecha (agrupados en el pacto Democracia y Progreso), anticipándose a la eventual derrota presidencial, consideraron los resultados de las elecciones parlamentarias como una compensación favorable a la pérdida del poder que hasta ese momento habían gozado; en tanto que para la Concertación, los resultados le permitieron llevar adelante su programa de gobierno, aunque -debido al equilibrio en el Parlamento- estuvo

Radical Social Democrático (PRSD), MAPU, Izquierda Cristiana (IC), más varios grupos socialistas, de centro y de derecha pequeños como una fracción del antiguo PN.

¹⁴ Posteriormente se modificó a 6 años.

permanentemente obligada a negociar acuerdos con la derecha, especialmente con RN, lo que contribuyó al fortalecimiento de la redemocratización iniciada en el país.¹⁵

Por la presidencia compitieron Patricio Aylwin, antiguo líder de la Democracia Cristiana, importante apoyo al 11 de septiembre de 1973 y líder de la oposición a Pinochet en los años '80, quien triunfó obteniendo el 55,17% del electorado; seguido por Hernán Büchi, joven y exitoso Ministro de Hacienda del Gobierno Militar, quien consiguió el 29,4%, y Francisco Javier Errázuriz, empresario independiente, aunque más cercano a la derecha, quien alcanzó el 15,43%.

Cuadro N°5
Resultado elecciones parlamentarias

Alianza	DIPUTADOS Votos	Porcentaje y elegidos	SENADO Votos	Porcentaje y elegidos
Concertación	3.499.713	51,49%- 69	3.714.989	54,63% - 22
Derecha	2.323.581	34,18%- 48	2.370.009	34,85% - 16
Partido del Sur	47.387	0,70% - ninguno	45.584	0,67 % - ninguno
Alianza de Centro	177.942	2,62% - ninguno	91.407	1,34% - ninguno
Liberal-Socialista	206.138	3,03 - ninguno	214.001	3,15% - ninguno
P. Nacional	53.819	0,79% - ninguno	43.741	0,64% - ninguno
Izquierda	360.601	5,31% - 2	288.397	4,24% - ninguno
Independientes	121.927	1,79% - 1	29.638	0,44% - ninguno
	6.797.122	120 diputados		38 senadores ¹⁶

Fuente: Información Histórico Electoral, Ministerio Interior, www.elecciones.gov.cl/indexf.html

La legitimidad obtenida por la coalición de gobierno, así como la representación alcanzada por la derecha, le permitieron a Patricio Aylwin contar con una “oposición blanda”, cuidadosa de su legitimidad, constituida por una derecha grande y pragmática como RN, en la cual convivirán sectores “liberales” y “conservadores”; una derecha más pequeña en tamaño, pero más fuerte doctrinariamente y con una amplia aceptación en los sectores populares, como la UDI; y un sector populista, surgida tras la elección presidencial de 1989 y representada en la Unión de Centro Centro (UCC) que durante los '90 se iría diluyendo hasta desaparecer.

A partir de ese momento, uno de los aspectos en los que debía concentrarse la derecha era consolidar su matriz democrática y “renovada” para así atenuar tanto a los sectores populistas como a los recelosos de la democracia, evitando un trasvasije o división de este espacio del electorado. Desde este punto de vista, se intentó cooptar sectores de centro, proyectando una imagen de modernización generacional, de eficacia y progresiva mayor moderación.

Finalmente, el cambio de gobierno realizado el 11 de marzo de 1990 marcó la culminación de un largo proceso que permitió la instalación de autoridades elegidas por votación popular tanto a nivel Ejecutivo como Legislativo. Sin embargo, este hito sólo fue el punto de partida de múltiples tareas destinadas a concluir o completar la transición -según el punto de vista que se mire. Lo que es indiscutible es que se buscó lograr la consolidación de la democracia, asegurar

¹⁵ La razón está en el sistema binominal, aunque cabe señalar que la mejor garantía del cumplimiento de las FFAA es su deber de lealtad a la Constitución. Si las FFAA chilenas tuvieran vocación “golpista” no habrían entregado el poder. Desde ese punto de vista no es correcto restarle mérito a ellas, como tampoco a la moderación de la centroderecha y de la oposición.

¹⁶ A estos 38 senadores elegidos democráticamente se deben sumar un total de 9 senadores institucionales o designados, lo cual altera la composición de la Cámara Alta, beneficiando a la Derecha en esta primera etapa. Lo anterior por cuanto la mayoría de ellos era designado directamente o por influencia del Gobierno Militar.

la gobernabilidad y echar las bases de un proyecto-país que conciliara el desarrollo, la economía de mercado y la democracia. En este sentido, el traspaso de la banda presidencial desde el General Pinochet a Patricio Aylwin, lejos de ser un acto de “traición” como han manifestado algunos, representó el signo de la continuidad histórica e constitucional.

Pinochet: la despedida y la permanencia. El legado del Gobierno Militar

En el verano chileno de 1990 el General Pinochet recorrió el país despidiéndose de sus partidarios y del poder. El slogan de su itinerario fue “Misión Cumplida”.

En efecto, varias cosas se habían cumplido. La primera de todas, derrotar al marxismo, ya no sólo en Chile, sino en todo el mundo (por la caída del Muro de Berlín, obra que ciertamente no hizo el gobierno chileno, pero que le servía de simbólico apoyo a su postura mantenida durante años).

El itinerario constitucional se había cumplido también en un cien por ciento, más allá de los temores pesimistas y de las intenciones de muchos de acortar la transición. La Constitución entraba en su plena vigencia. Esto era novedoso en Chile, por cuanto la Constitución de 1925 demoró siete años en entrar en marcha, con un año de anarquía entremedio en el cual hubo casi una decena de gobiernos.

El modelo económico se había consolidado en los más diversos ámbitos, como la transformación del sistema de pensiones, la libertad de enseñanza y el desarrollo de universidades privadas, un nuevo régimen laboral, la consolidación del derecho de propiedad y la libre iniciativa en el campo económico y un amplio, aunque inconcluso, proceso de privatizaciones, los que en conjunto podríamos denominar los “enclaves libertarios” del gobierno militar chileno.

¿Qué dejó el Gobierno Militar chileno? ¿Cuál es su legado?

No cabe duda que las dos mayores transformaciones del gobierno militar fueron la Constitución de 1980 y el modelo económico liberal. Sin embargo, gran parte de la literatura política sobre el Gobierno Militar del General Pinochet y la transición chilena destaca la presencia de ciertos “enclaves autoritarios” con los cuales aquél habría buscado perpetuar sus ideas y su obra. Habitualmente estos enclaves son mirados de manera crítica, e incluyen diferentes materias: privatizaciones, la Constitución de 1980, los senadores institucionales o más conocidos como “designados”, la permanencia de Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998, el sistema electoral, entre otros.

Más allá del valor de esta visión, lo cierto es que se ha impuesto hasta con majadería, al punto que hay quienes sostienen que a comienzos del siglo XXI Chile continúa en un proceso de transición y que su sistema de gobierno no es esencialmente democrático¹⁷. El tema es al menos discutible. Son muchas las características del sistema político chileno que lo definen como democrático, al menos en igual o mayor medida que el experimentado por Chile antes de

¹⁷ La discusión sobre el término de la transición se reactivó a nivel de la opinión pública con motivo de la detención del general Pinochet en Londres en 1998.

1973, sea por razones constitucionales, como por prácticas políticas o convicción de los actores sociales.

El régimen del General Pinochet tuvo un momento de prueba capital precisamente cuando terminó: fue sucedido por el gobierno de Patricio Aylwin, representante de la Concertación de Partidos por la Democracia, principal referente opositor a su gobierno y elegido por una amplia mayoría de electores.

La Concertación tenía, en lo esencial, dos grandes posibilidades en lo económico-social: intentar revertir, “en la medida de lo posible” (como había afirmado Aylwin para el tratamiento del problema de Derechos Humanos), el modelo creado por el gobierno militar, dándole un tinte más socializante o estatista; o bien seguir aplicando el mismo sistema económico de mercado, más allá si se hacían o no algunas reformas menores.

Optaron por lo segundo, por lo cual se ha hablado de un continuismo “pinochetista” o de una homogeneización de los diferentes sectores políticos, hoy cautivados por la “marea liberal”. En tanto que los desafíos planteados por el propio nuevo gobierno fueron: a) transición, b) consolidación, c) gobernabilidad y d) desarrollo de un crecimiento con equidad

Quizá uno de los elementos más novedosos de la política hispanoamericana a fines del siglo XX y comienzos del XXI sea el contenido en el proceso político chileno.

De partida, de los gobiernos militares del continente entre los años 1960-1980, sólo el del general Pinochet heredó a sus sucesores civiles una Constitución política. Esto puede ser considerado una novedad respecto de los países vecinos, pero en Chile ha sido una larga tradición, producto del carácter fáctico-constituyente de las intervenciones militares chilenas, a través de guerras civiles (siglo XIX) o golpes de estado (siglo XX).

En segundo término, otro legado fundamental fue el modelo económico, impuesto sin la participación de los opositores y contra una mayoría importante de la población. Y también con la reprobación intelectual y práctica de los países del continente, que no entendían el experimento chileno y preferían formas alternativas de “subdesarrollo” y repetición de la miseria.

Un tercer elemento está en un aspecto donde el gobierno militar fracasó, como fue en deponer los odios y resentimientos acumulados de manera creciente en los años '60 y comienzos de los '70, que llevaron al clima de guerra civil que motivó la intervención militar. Pero el gobierno careció de voluntad o no tuvo la capacidad de lograr una reconciliación fecunda y amplia en la clase política y en la población en general. Hubo aspectos, como las violaciones a los derechos humanos, que incluso ampliaron o renovaron la división interna de Chile. Es obvio que el gobierno militar no inventó la discordia civil del país, pero tampoco logró superarla.

En fin, ¿corresponde por ello inscribir a Augusto Pinochet entre los grandes reformadores de la República? Ciertamente, concordamos con Gonzalo Vial, quien en su libro *Pinochet. La biografía* (2002) señala que la respuesta es indiscutible. Dicho de otro modo, ¿cómo pasará Pinochet a la historia?: a) Pinochet respaldó un golpe que probablemente no deseaba. Con ello evitó la guerra civil y decenas de miles de muertos y persecuciones más envenenadas y

odiosas que las ocurridas, evitando que Chile cayera en el “socialismo real”. b) Sorteó exitosamente dos guerras inminentes con Perú y Argentina, respecto de la segunda, además alcanza una paz definitiva y fecunda. c) Creó una “nueva” institucionalidad, dándole al país una Constitución que está vigente hasta hoy y cuyas normas y plazos permitieron a los civiles recuperar puntualmente -aunque después de un largo período- el poder y la democracia. d) Restauró la plenitud del derecho de propiedad y lo solidifica, junto con establecer un nuevo esquema económico, cuyos principios son el Estado subsidiario, la asignación de recursos por el mercado, los grandes equilibrios de las finanzas públicas, la libre empresa, la libre competencia, la libertad de precios, la desregulación en general y la apertura al exterior, creando estos verdaderos “enclaves libertarios” de los cuales hemos hablado. e) Mejoró los índices de salud. f) Hizo flexible el régimen de trabajo mediante el Plan Laboral y reemplaza el quebrado sistema antiguo de previsión por uno nuevo de ahorro individual (AFP), que es una de las modernizaciones más profundas del sistema y de mayor proyección internacional. g) Se inventan e impulsa los “subsidios” para fomentar la vivienda popular. h) Se descentralizó al nivel de las municipalidades la educación básica y media. Se estimuló la subvención escolar y se abren las puertas a las Universidades Privadas. En síntesis, tal como afirma Vial, “el país que habitamos es inimaginable si se le quita la impronta del régimen militar... y de su caudillo”.

Por tanto, hemos de concluir que Pinochet pasará, sin duda, a la historia al igual que gobierno con sus altos y sus bajos: a) Siendo considerado, tal como sucede hoy en Europa, como un dictador en cuyo gobierno se violaron los derechos humanos, asignándole la responsabilidad política que recae en los gobernantes. b) Será considerado como el militar que liberó a Chile de la dictadura marxista en un momento en que dicha ideología tenía gran vigencia en el mundo y parecía irreversible. c) Se recordará por la institucionalidad creada y el ordenamiento económico, social y político (los “enclaves libertarios”) que permitió a Chile iniciar la senda del desarrollo y que a comienzos del siglo XXI, a treinta años del 11 de septiembre de 1973, lo han convertido en uno de los países líderes de la región.

Bibliografía sugerida

- Allamand, Andrés, *La travesía del desierto*. Aguilar, Santiago, 1999.
- Angell, Alan. *Chile de Alessandri a Pinochet. En busca de la utopía*. Ed. Andrés Bello; Santiago, 1993.
- Angell, Alan. “The Pinochet Factor in Chilean Politics”. *Bicentenario. Revista de historia de Chile y América*. Vol.1, N°1, 2002: 53-73.
- Arancibia, Patricia (et. al), *Jarpa. Confesiones políticas*. La Tercera/Mondadori, Santiago, 2002.
- Araujo, Karen y Craig Roberts, Paul. *Chile: Dos visiones. La era Allende-Pinochet*. Santiago, Universidad Andrés Bello, 2000.
- Arriagada, Genaro. *Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet*. Santiago, Ed. Sudamericana, 1998.
- Aylwin, Patricio. *El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del No*. Santiago, Ediciones B, 1998.
- Boeninger, Edgardo. *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad*. Santiago, Ed. Andrés Bello, 1997.
- Briones, Álvaro, *La pata coja y la transición infinita*. Santiago, Ediciones B, 1999.
- Büchi, Hernán, *La transformación económica de Chile. Del estatismo a la libertad económica*. Bogotá, Norma, 1993.

- Cañas, Enrique. *Proceso político en Chile 1973-1990*. Ed. Andrés Bello, Santiago, 1997.
- Cavallo, Ascanio, *Los hombres de la transición*. Santiago, Ed. Andrés Bello, 1992.
- Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel y Sepúlveda, Oscar. *La historia oculta del régimen militar*. Ed. Antártica, Santiago, 1989.
- Cavarozzi, Marcelo y Garretón, Manuel (Eds). *Muerte y resurrección: Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones en el cono sur*. Santiago, Flacso, 1989.
- Constable, Pamela & Valenzuela, Arturo. *A Nation of Enemies. Chile Under Pinochet*. Norton, USA, 1991.
- De Castro, Sergio (Prólogo). *El Ladrillo. Bases de la política económica del gobierno militar*. Santiago, CEP, 1992.
- Drake Paul W. & Jaksic, Iván. *El difícil camino hacia la democracia en Chile*. Santiago, Flacso, 1993.
- Ensalaco, Mark, *Chile bajo Pinochet*. Alianza Editorial, Madrid, 2002.
- Fernández, Sergio, *Mi lucha por la democracia*. Santiago, Ed. Los Andes, 1994.
- Fontaine, Arturo. *La historia no contada de los economistas y el presidente Pinochet*. Santiago, Zig-Zag, 1988.
- Garretón, Manuel A., *Reconstruir la política. Transición y consolidación democrática en Chile*, Flacso, Santiago, 1987.
- Gazmuri, Cristián. *La persistencia de la memoria. Reflexiones de un civil sobre la dictadura*. Ril Editores, Santiago, 2000.
- _____. *Eduardo Frei Montalva y su época*. Aguilar, Santiago, 2000. 2 vols.
- Góngora, Mario, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Ed. Universitaria, Santiago, 1986.
- Guzmán, Jaime, *Escritos personales*. Santiago, Zig-Zag, 1992.
- Huneeus, Carlos. *El régimen de Pinochet*. Ed. Sudamericana, Santiago, 2000.
- Jocelyn-Holt, Alfredo, *El Chile perplejo*. Ariel, Santiago, 1998.
- Larraín, Felipe y Vergara, Rodrigo. *La transformación económica de Chile*. CEP, Santiago, 2000.
- Lavín, Joaquín, *Revolución silenciosa*. Santiago, Zig-Zag, 1987.
- Loveman, Brian y Lira, Elizabeth. *Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de reconciliación política 1932-1994*. Santiago, Lom –Dibam, 2000.
- Malamud, Carlos. "El caso Pinochet en España". *Bicentenario. Revista de historia de Chile y América*. Vol.1, N°1, 2002: 75-100.
- Meller, Patricio (et. al). *Chile. Evolución Macroeconómica, Financiación Externa y cambio Político en la década de los 80*. Madrid, Fundación CEDEAL, 1992.
- Moulian, Tomás, *Chile actual: Anatomía de un mito*. Lom, Santiago, 1997.
- Pinochet, Augusto, *Camino recorrido. Memorias de un soldado*. Instituto Geográfico Militar, Santiago, 4 tomos, 1991.
- Piñera, José, *La revolución laboral*. Zig-Zag, Santiago, 1990.
- _____, *El cascabel al gato*. Zig-Zag, Santiago, 1991.
- _____, "Chile: El poder de una idea", En Barry Levine (Comp.). *El desafío neoliberal*. Norma, Bogotá, 1992: 77-92.
- Rojas, Gonzalo. *Chile escoge la libertad. La presidencia de Augusto Pinochet Ugarte 11.IX.1973-11.III.1990*. Zig-Zag, Santiago, 1998-2000.
- San Francisco, Alejandro. "Chile y el fin de la historia". *Bicentenario. Revista de historia de Chile y América*. Vol.1, N°1, 2002: 5-51
- San Francisco, Alejandro. "Los enclaves libertarios del Gobierno Militar chileno", Inédito, 2003.
- Soto, Angel. *Historia reciente de la derecha chilena: Antipartidismo e independientes (1958-1993)*. Tesis para optar al grado de Doctor en América Latina Contemporánea. IU Ortega y Gasset. Universidad Complutense, Madrid, 2001.
- Tironi, Eugenio. *El régimen autoritario. Para una sociología de Pinochet*. Santiago, Dolmen Ediciones, 1998.
- Valenzuela, Arturo. *El quiebre de la democracia en Chile*. Santiago, Flacso, 1989.
- Valenzuela, Samuel y Valenzuela, Arturo (Ed.), *Military Rule in Chile. Dictatorship and Oppositions*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1987.
- Vial, Gonzalo. *Pinochet. La biografía*. El Mercurio/Aguilar, Santiago, 2002.
- Vial, Gonzalo (Editor). *Análisis crítico del régimen militar*. Santiago, Universidad Finis Terrae, 1998.
- Whelan, James. *Desde las cenizas. Vida, muerte y transfiguración de la democracia en Chile 1833-1988*. Santiago, Zig-Zag, 1993.

Wisecarver, Daniel. *El modelo económico chileno*. Santiago, CINDE, 1992.